

Santiago, diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 16: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don Diego Faccuse Jorquera, abogado, por don Israel Ariel Pradenas Piñeiro, demandante en causa RIT-M-4171-2024 seguida ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulada “Pradenas con RT Logistics Spa”, sobre despido injustificado y cobro de prestaciones, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministros señor Jaime Balmaceda Errazuriz y señora Erika Andrea Villegas Pavlich (s) por haber dictado con falta o abuso la resolución de siete de enero último, por medio de la cual confirmaron la de primera instancia que no hizo lugar a remitir los antecedentes a la causa RIT O-3845-2024, para la tramitación de la causa en procedimiento general.

Expone la existencia de una falta o abuso grave en la interpretación y aplicación de los artículos 496, 497 y 498 del Código del Trabajo, y 19 N°3, inciso primero de la Constitución Política de la República, al negarse a remitir los antecedentes para conocer de la demanda en procedimiento ordinario, bajo el argumento que, atendida su cuantía, debió tramitarse bajo las reglas del procedimiento monitorio, en circunstancias que, de su tenor literal, fundamento y de los principios que inspiran la legislación laboral, es posible concluir que el trabajador tiene la facultad de demandar conforme a cualquiera de los procedimientos señalados, afectando también con ello el derecho a la tutela judicial al privarlo de un pronunciamiento respecto de su pretensión.

Segundo: Que, en su informe, los jueces recurridos exponen que las razones que sustentaron la decisión quedaron expresadas en la resolución que pretende impugnarse, esto es, que la pertinencia del procedimiento no puede quedar supeditada a cuestiones de orden práctico o de conveniencia circunstancial del litigante, por lo que teniendo en cuenta que la acción ejercida sólo puede sustanciarse de acuerdo con las reglas del procedimiento monitorio, dado que en su origen tenía un carácter excepcional, situación que fue modificada por la Ley N° 20.287, que eliminó su carácter alternativo y determinó su aplicación a juicios en que la cuantía no supere los quince ingresos mínimos mensuales, como es el caso, franqueando la ley un procedimiento específico para el ejercicio de la acción y, en tanto, tratarse de normas de procedimiento, son de orden público, indisponibles para las partes. Por último, indicaron que el artículo 498 del Código Laboral no puede entenderse como una isla, en el sentido que la posibilidad de recurrir al procedimiento de aplicación general en un caso como el



de autos, supone la formulación de reclamo administrativo, lo que no ocurrió en la especie.

Tercero: Que el arbitrio procesal que ocupa estas reflexiones se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "*De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales*", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "*Las facultades disciplinarias*" y, sobre el particular, el inciso primero del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales estatuye: "*El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma*".

Cuarto: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso de queja es menester que el tribunal haya dictado una resolución cometiendo falta o abuso grave, esto es, de mucha entidad o importancia, único contexto que autoriza aplicarle una sanción disciplinaria que debería imponerse si se lo acoge. Según la doctrina, con dicha forma de concebir el referido *recurso* "...se recoge el interés del Ejecutivo y de la Suprema de limitar la procedencia (sólo para abusos o faltas graves), poniendo fin a la utilización del recurso de queja para combatir el simple error judicial y las diferencias de criterio jurídico..." (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40).

Por lo tanto, se puede concluir que no es un medio que permita refutar cualquier discrepancia jurídica o errores que un juez haya cometido en el ejercicio de la labor jurisdiccional. Dicha postura es la que esta Corte ha adoptado de manera invariable, según consta, entre otras, en las sentencias dictadas en los autos número de Rol 10.243-11, 1701-2013 y 3924-2013 de 11 de enero de 2012, y de 23 de marzo y 28 de agosto, ambas de 2013, respectivamente.

Quinto: Que esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mario Mosquera



Ruiz y Cristián Maturana Miquel, Los recursos procesales, Editorial Jurídica, Santiago, año 2010, p. 387). También cuando una determinada norma legal se ha interpretado sin considerar los principios que la informan, en concreto el de protección, cuya manifestación concreta es el *“in dubio pro operario”*.

En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir *“faltas o abusos graves”* cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la *“trascendencia”*, y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia. (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sexto: Que del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional se aprecia lo siguiente:

a.- Con fecha 29 de mayo de 2024 don Israel Ariel Pradenas Piñeiro dedujo demanda en procedimiento de aplicación general por despido injustificado y cobro de prestaciones en contra de RT Logistic SPA.

b.- Por resolución de 31 de mayo de 2024 el tribunal de primera instancia dio curso a la demanda bajo el RIT O-3845-2024 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y citó a audiencia preparatoria de juicio oral a celebrarse el día 29 de agosto del mismo año, en la que el tribunal hizo uso de las facultades oficiosas y, *“en virtud de lo dispuesto en el artículo 429 inciso segundo, atendida la cuantía de lo demandado en este proceso, la cual no alcanza las 15 Unidades Tributarias Mensuales, anula todo lo obrado y ordena que se ingrese por procedimiento monitorio, resolviendo como en derecho corresponde.”*

c.- Con fecha 4 de septiembre de 2024 la demanda ingresó bajo el RIT-M-4172-2024 ante el mismo tribunal y por resolución de 5 de septiembre del mismo año resolvió no dar curso a la demanda porque de acuerdo al examen realizado al libelo, se advierte que la cuantía total de lo pretendido en autos es inferior a quince Ingresos Mínimos Mensuales; el actor señaló en la demanda interpuesta, que no realizó trámite administrativo ante la Inspección del Trabajo, lo que implica el incumplimiento de un requisito de procesabilidad, impidiendo accionar mediante el procedimiento monitorio en relación con lo dispuesto en el 497 del Código del Trabajo; el artículo mencionado dispone que *“Será necesario que previo al inicio*



de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación.” Que, atendido lo dispuesto en el artículo 496 del cuerpo legal citado, ameritaría ordenar el cambio de procedimiento a juicio monitorio, para lo cual se hace necesario contar con el trámite previo del reclamo ante la Inspección del Trabajo, y conforme el resultado del comparendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 499 del Código del Trabajo; circunstancia que, de acuerdo a lo referido, no se da en la especie.

d.- Con fecha 6 de septiembre de 2024 el demandante solicitó remitir los antecedentes a la causa original, RIT O-3845-2024, en el correspondiente procedimiento de aplicación general, y se cite una nueva fecha y hora para audiencia preparatoria. Lo que fue rechazado por el tribunal de base por resolución de 9 del mismo mes en atención a lo obrado en audiencia preparatoria en dicha causa.

e.- Apelada dicha decisión, el tribunal de alzada la confirmó teniendo en consideración las argumentaciones que se señalan a propósito del informe referido precedentemente.

Séptimo: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos –al decidir como lo hicieron– hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, el recurso gira en torno a la interpretación que los sentenciadores hicieron del inciso penúltimo del artículo 496 y siguientes del Código del Trabajo y de las normas que regulan el procedimiento monitorio laboral; la primera prescribe que dicho procedimiento se aplicará *“Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a quince ingresos mínimos mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar por aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo 162”*, 497, inciso primero, *“Será necesario que previo al inicio de la acción judicial se haya deducido reclamo ante la Inspección del Trabajo que corresponda, la que deberá fijar día y hora para la realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicha reclamación”* y 498, que dispone que *“En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.*

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título”.



En consecuencia, la legislación sólo faculta la intervención de la judicatura laboral para conocer de las demandas cuya cuantía sea inferior a quince ingresos mínimos mensuales, en procedimiento monitorio, siempre que previamente se haya reclamado ante la Inspección del Trabajo y permite al trabajador demandar en procedimiento de aplicación general sólo si efectuado el reclamo no compareció al comparendo respectivo ante la Administración del Estado.

Como es posible observar, la norma del inciso segundo del artículo 498 del código citado, parte de la base de que ha existido reclamación en sede administrativa, distinguiendo el procedimiento aplicable en relación a la comparecencia o no del trabajador al comparendo ante la Inspección del Trabajo.

Octavo: Que, al respecto, cabe agregar que, como ha dicho reiteradamente este tribunal, el proceso de interpretación de la ley que llevan a cabo la magistratura en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de aquellos, salvo que se constate una violación evidente y manifiesta en dicha actividad, que por su entidad y arbitrariedad, configure una falta o abuso que deba ser enmendada, cuestión que en la especie no concurre, por cuanto se limitaron a argumentar, arribando a conclusiones jurídicas que se enmarcan dentro de los criterios de racionalidad propios del ejercicio de la jurisdicción, constituyendo el presente arbitrio, en definitiva, una expresión de la disconformidad del recurrente, que, como se ha dicho, no es controlable por esta vía.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza el recurso de queja** interpuesto en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago ministros ministros señor Jaime Balmaceda Errazuriz y señora Erika Andrea Villegas Pavlich (s),

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Andrea Muñoz y de la Abogada Integrante Sra. Fabiola Lathrop, quienes fueron de opinión de acoger el recurso de queja y en consecuencia disponer que los antecedentes sean remitidos al expediente digital RIT-O-3845-2024 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, debiéndosele dar curso de conformidad al procedimiento ordinario establecido por la ley, por los siguientes argumentos:

1º: Que, tal como reiteradamente ha señalado esta Corte (roles N° 9.813-2019, 140.091-2020 y últimamente N° 18.165-2024), la interpretación efectuada por la magistratura priva al trabajador que no reclama ante la Inspección del Trabajo y demanda por una suma igual o inferior a quince ingresos mínimos mensuales de toda posibilidad de accionar judicialmente, ya sea a través del procedimiento ordinario o del monitorio, al determinar que por la cuantía no puede



tramitarse conforme al primero, y que, por no haber reclamado administrativamente, tampoco puede accionar a través del segundo.

Tal interpretación deja al trabajador, en los hechos, sin recurso judicial alguno, impidiéndole someter al conocimiento del tribunal especializado sus legítimas pretensiones derivadas del término de una relación de naturaleza laboral.

2°: Que no debe olvidarse que, en materia laboral, las normas procesales deben ser comprendidas integrando de manera concreta los principios inspiradores que justifican la existencia de tal disciplina, y uno de los basamentos sensibles en este asunto dice relación con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, como consecuencia evidente del reconocimiento constitucional de lo que la doctrina y el derecho convencional y comparado denomina como derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto fundamento esencial de todo Estado de Derecho, que se encuentra garantizado a nivel constitucional mediante el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al reconocer la prerrogativa universal de igual protección de la ley, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, y a un justo y racional procedimiento, garantía que, además, tiene como contrapartida orgánica, los principios rectores de la actividad jurisdiccional consagrados en el artículo 76 del texto constitucional, específicamente el de inexcusabilidad, que impone a la magistratura el deber imperativo de otorgar un pronunciamiento de mérito sobre la controversia que legalmente se le plantee, sin poder excusarse de hacerlo.

3°: Que, para resolver, se debe tener en consideración que el artículo 498 del Código del Trabajo dispone que *“En caso que el reclamante no se presentare al comparendo, estando legalmente citado, se pondrá término a dicha instancia, archivándose los antecedentes.*

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el trabajador podrá accionar judicialmente conforme a las reglas del procedimiento de aplicación general regulado en el Párrafo 3° del presente Título”.

4°: Que, de este modo, toda interpretación que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial de fondo que adjudique un derecho dubitado, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, máxime en el contexto del Derecho del Trabajo por la especial relevancia que su rol protector impone, debe en lo posible evitar salidas incidentales que impidan un pronunciamiento de mérito.



Regístrese, comuníquese y archívese.
Rol N°1.233-2025



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Fabiola Esther Lathrop G., Álvaro Rodrigo Vidal O. Santiago, diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

